

CUADERNOS DE

2.⁰⁰ Pesos
Centroamericanos

No 24

**EL
SOCIALISTA**
Centroamericano



**DECLARACIONES DEL
PSOCA EN LA LUCHA
CONTRA EL GOBIERNO DE
PÉREZ MOLINA**



**25 TESIS SOBRE LA
SITUACIÓN ACTUAL EN
GUATEMALA**

LOS CUADERNOS DE “EL SOCIALISTA CENTROAMERICANO” son publicados bajo la responsabilidad del **PARTIDO SOCIALISTA CENTROAMERICANO (PSOCA).**

“Declaraciones del PSOCA y 25 Tesis sobre la situación en Guatemala”

Primera Edición

Diseño y Diagramación: Antonio Fonseca

Portada: Margarita Bellorini

PSOCA Editorial®

Centroamérica, 10 de Agosto del 2016

Presentación.

Guatemala es un país clave en Centroamérica. Desde la época colonial hasta la actualidad, ha ejercido una influencia notable en el desarrollo de los acontecimientos políticos en la región.

Ha sido, a lo largo de la historia, sede o cuna de la contrarrevolución. Ahí se gestaron las principales conspiraciones y se armaron ejércitos para destruir el Estado Federal. Durante todo el siglo XIX, salvo la intentona unionista fracasada del general Justo Rufino Barrios (1873-1885), el gobierno siempre ha estado en manos de fuerzas conservadoras reaccionarias, que obedece los intereses de una oligarquía cuyos privilegios vienen desde la época colonial.

En el siglo XX, con el breve interregno del gobierno progresista de Jacobo Arbenz (1944-1954), el poder ha estado realmente en manos de los militares, quienes después del fracaso de la revolución democrática de octubre de 1944, ejercieron una sistemática estrategia de aniquilamiento de las organizaciones obreras, campesinas, indígenas y populares.

Esta es una parte de la historia de Guatemala. La otra parte no ha sido contada todavía. Durante décadas, Guatemala ha sido escenario de constantes luchas de las masas campesinas e indígenas que se rebelan contra la opresión y la miseria a que son sometidas. Bajo el pretexto de combatir a las guerrillas, los gobiernos militares ejercieron una política de genocidio constante, cuyos horrores apenas conocemos.

Pero en los últimos años la situación ha estado cambiando favorablemente. Crecen las movilizaciones y protestas populares contra las degradantes condiciones de vida de la mayoría de la población. La presión social es tan fuerte, que terminó tumbando gobiernos corruptos como el de Otto Pérez Molina.

Ante la creciente presión social, el imperialismo norteamericano está aplicando una política preventiva, tendiente a fortalecer las instituciones del Estado burgués, para que las masas crean y confíen en la democracia burguesa. Después de tantos años de represión y corrupción generalizada, este falso ambiente democrático pretende engañar a la dirigencia de las organizaciones obreras, campesinas,

PSOCA

indígenas y populares, atrayéndolas a este proceso de revitalización de la democracia burguesa.

Por ello, desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) creemos conveniente iniciar una discusión con la izquierda y las organizaciones populares, sobre el desarrollo de estos acontecimientos, y como es necesario tener una política que unifique a la izquierda y sectores populares, en la necesidad de crear nuestra propia alternativa de gobierno.

Las Declaraciones del PSOCA en la lucha contra el gobierno de Pérez Molina, y las 25 Tesis sobre la situación actual en Guatemala, deben considerarse, no como documentos acabados, sino como aportes para clarificar el análisis e intensificar la discusión democrática entre la izquierda, sobre lo que está ocurriendo, para tener claridad hacia dónde vamos y que debemos hacer.

Centroamérica, 10 de agosto del 2016

Melchor Benavente

**DECLARACIONES DEL
PSOCA EN LA LUCHA
CONTRA EL GOBIERNO DE
PÉREZ MOLINA**

¡POR UNA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, LIBRE Y DEMOCRÁTICA, QUE REORGANICE GUATEMALA A FAVOR DE LOS POBRES!

A finales de mayo el presidente Otto Pérez Molina anunció un plan de "modernización del Estado", que incluiría reformas a la Constitución Política de la República de Guatemala. Esta es una de las inesperadas maniobras que en cinco meses de gestión ha implementado el gobierno del derechista Partido Patriota (PP) y con las cuales ha sorprendido a muchos sectores sociales.

Desde que el ex general Pérez Molina se perfiló como el posible ganador en las pasadas elecciones de 2011, casi toda la izquierda y las organizaciones sociales dieron la voz de alarma, anticipando el retorno a los peores años de la represión de los gobiernos militares y la guerra interna. Una buena parte los grupos políticos que se reivindican como progresistas, democráticos y de izquierda no dudaron en apoyar en la segunda vuelta electoral al también derechista y demagogo Manuel Baldizón, candidato que representaba sectores burgueses emergentes, ligados a manejos corruptos en las municipalidades del interior y al narcotráfico, adoptando la reaccionaria postura de aceptar el "mal menor", o incluso atribuyéndole cualidades democráticas que está muy lejos de tener.

Con el triunfo electoral del PP, retomaron el manejo del Estado y el acceso a las decisiones de gobierno los grupos más conservadores de la burguesía, los grandes grupos corporativos y los grupos oligárquicos ligados al agro. A la par, sectores burgueses ascendentes ligados al ejército y los negocios vinculados a éste, accedieron al control directo del gobierno, impulsados por la promesa de aplicar mano dura contra la delincuencia y el crimen organizado, que se han convertido en un grave flagelo para la población. El trauma sufrido por la izquierda y las organizaciones populares guatemaltecas a causa de las salvajes masacres perpetradas por el ejército durante 36 años de conflicto armado interno, hicieron temer lo peor ante la llegada al gobierno de ex militares vinculados a las matanzas y el genocidio.

PSOCA

Sin embargo, como siempre, la realidad ha resultado ser más compleja y rica que los análisis unilaterales y simplistas.

La demagógica política de negociación del gobierno del PP

Los individuos no actúan impelidos solamente por sus características e inclinaciones personales, sino condicionados por el entorno social, político y económico, que se expresa en coyunturas específicas. En términos generales, la experiencia histórica nos indica que una represión violenta generalizada contra las clases oprimidas en su conjunto es provocada por el temor de las clases gobernantes, ante un ascenso igualmente generalizado de las luchas populares. Es la lucha final por el poder.

En Guatemala no existe todavía una situación revolucionaria que obligue al Ejército a frenar violentamente el ascenso y radicalización de las masas. En la actual coyuntura tenemos un ascenso lento y desigual de sectores de masas, especialmente en el campo, con luchas sectoriales limitadas en el sector urbano, luchas dispersas e intentos unitarios que marchan con dificultad.

Es por ello que el gobierno de Pérez Molina se ha centrado, en esta primera fase, en aparecer como un gobernante conciliador, priorizando una políticas de negociaciones y diálogos con los sectores que pasan a luchar directamente en las calles, enarbolando siempre su promesa de combatir al crimen organizado y la delincuencia, tocando un tema tan sensible para el ciudadano común, pero al mismo tiempo trata de cumplir la agenda de la gran burguesía, favoreciendo el clima de inversiones en energía, agroindustria, minería, actividad maquilera y mega proyectos basados en alianzas público-privadas.

Para crear el ambiente propicio para los negocios de los capitalistas nacionales y extranjeros, el gobierno trata de garantizar cierta "paz social" haciendo suyos, transformándolos, los programas asistenciales del gobierno anterior. Además, el presidente se ha presentado como un funcionario abierto al diálogo, la concertación y la negociación con los sindicatos y organizaciones populares.

De esta manera logró un acuerdo con los principales sindicatos de trabajadores de la salud, que hasta la fecha ha llevado a una relativa y precaria estabilidad a este explosivo sector que estuvo al frente de las luchas durante el gobierno pasado. La dirigencia del magisterio, después de una breve demostración de fuerza a inicios de la gestión de Pérez Molina, se ha plegado totalmente al gobierno demostrando una vez más su vil oportunismo.

La extrema pobreza en el campo crea una ebullición social permanente en la sociedad guatemalteca. Con el sector campesino el gobierno ha tenido menos margen de maniobra, pues sus demandas

Declaraciones y Tesis sobre Guatemala

afectan directamente los intereses de la burguesía agroindustrial y de la cúpula militar. Durante la marcha de nueve días en marzo del año en curso, Pérez Molina se mostró abierto al diálogo, la marcha no fue reprimida e incluso en una actitud demagógica acudió a su encuentro para constatar las necesidades de los manifestantes. Sin embargo, las negociaciones han llegado a un punto muerto ante la actitud cerrada del gobierno en torno a reclamos vitales. En este caso la táctica del presidente es de sostener, una tras otra, reuniones de diálogo para dar largas al tema. El nombramiento de dos funcionarios encargados de un sistema de diálogo nacional es expresión de esta política.

La oligarquía quiere un Estado más fuerte

Pero otra de las tareas del nuevo gobierno es restaurar la autoridad del Estado en el territorio nacional, deteriorada a causa del crimen organizado y la debilidad del sistema de justicia. Ello ha conducido a demostraciones de fuerza como el despliegue de elementos del ejército durante el conflicto entre los pobladores de El Regadío y el terrateniente Pedro Brol, la implantación del Estado de Sitio en Santa Cruz Barillas, la represión contra el bloqueo realizado por estudiantes de magisterio, la apertura de bases militares, especialmente en zonas conflictivas como San Juan Sacatepéquez, y la presencia del ejército en operaciones de combate a la delincuencia y las bandas criminales.

La burguesía ha sido beneficiada con una reforma fiscal que apenas toca sus intereses, la aceptación de un incremento voluntario de las regalías que pagan las empresas mineras y el anuncio de planes que facilitan la inversión, basados en privilegios fiscales, la disminución del salario mínimo y la aprobación de la flexibilización laboral y el trabajo a tiempo parcial, es decir en la sobre explotación de la mano de obra. Estos planes se plantean metas utópicas como la creación de 47 mil empleos anuales y un crecimiento del Producto Interno Bruto del 4% en este año.

Por otro lado, la crisis económica que afecta a la Unión Europea y los Estados Unidos ha provocado un descenso de las exportaciones, agravada por la caída de los precios de los productos agrícolas de exportación. La desaceleración de la economía ha repercutido en un estancamiento de los ingresos fiscales y la inversión pública. Esta situación limitará significativamente la capacidad de maniobra y negociación del gobierno, pudiendo dar paso a un giro en su política.

La punta del iceberg: reformas constitucionales

En este complicado contexto Pérez Molina lanzó su propuesta de reformar parcialmente la Constitución. Estas reformas se harían para evitar dificultades en el futuro, y se llevarían a cabo en torno a cuatro ejes: seguridad y justicia, transparencia, cambios en las reglas de las

PSOCA

leyes políticas y fortalecimiento del Estado en el área fiscal.

El gobierno aún no plantea claramente los puntos constitucionales que desea cambiar, aunque ha sido claro en la intención de introducir cambios al artículo 23 que versa sobre la inviolabilidad de la vivienda y establece que la autoridad sólo puede penetrar a una vivienda con orden de juez competente y nunca antes de las seis ni después de las dieciocho horas. Este artículo se estableció debido a los abusos del ejército durante el conflicto armado interno. El gobierno ahora pretende que se puedan hacer cateos también en horas de la noche. No hay dudas que la oligarquía quiere un Estado mucho más fuerte y represivo, al viejo estilo de las dictaduras militares.

En cuanto al tema fiscal, funcionarios del gobierno han mencionado que los aportes financieros que se deben incluir en el Presupuesto General de la Nación por mandato constitucional, le restan flexibilidad al manejo de los fondos gubernamentales. Entre estos aportes han mencionado el destinado a la Universidad de San Carlos, lo que quiere decir que hay una intención velada de reducir aún más los fondos de la USAC, algo que no debemos permitir. Detrás de esta posible reforma constitucional, se esconden un ataque directo a la educación superior, que de por sí está más que necesitada de mayores recursos económicos. El presupuesto actual de la USAC no da para cubrir las necesidades de la juventud.

Los poderes del Estado y órganos constitucionales, casi la totalidad de partidos políticos, se resisten en convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, para que el pueblo se exprese democráticamente. La oligarquía quiere utilizar la mayoría del PP y sus aliados para hacer los cambios desde arriba, sin que el pueblo participe y decida. El demagogo Manuel Baldizón y su partido Líder se declaró a favor de la ANC con una agenda que incluye la retrógrada disposición de restablecer la pena de muerte, pero este es un mecanismo de presión para canalizar el descontento contra el actual gobierno. A partir de la semana que inicia el 11 de junio una comisión nombrada por el presidente recibirá propuestas de agrupaciones de la sociedad civil para tomarlas en cuenta al hacer las reformas. La intención es presentar la propuesta definitiva al Congreso el 2 de julio.

Está en marcha, pues, un proceso de reforma constitucional desde arriba, obedeciendo los intereses de la oligarquía y la burguesía, que quieren un Estado más fuerte, pero que el mismo tiempo no quieren que el pueblo discuta democráticamente los principales problemas de Guatemala

Por una Asamblea Nacional Constituyente que favorezca a los oprimidos

El pueblo guatemalteco vive una situación extremadamente

Declaraciones y Tesis sobre Guatemala

precaria. Con poco más de la mitad de la población en situación de pobreza y extrema pobreza, los índices de desnutrición infantil más altos del continente, un elevado porcentaje de la población económicamente activa dedicada a trabajos informales, falta de oportunidades para los jóvenes que se incorporan a la fuerza laboral que hace que se involucren en el crimen, salarios que escasamente alcanzan para cubrir las necesidades de las familias, etc.

La introducción de cambios a la Constitución de la República, por si solos, no contribuye a transformar esta grave situación. Guatemala necesita cambios profundos, pero no los cambios que se les antojen al gobierno, los partidos burgueses y sus diputados, sino los cambios que expresen realmente las necesidades del pueblo explotado. El Estado guatemalteco es un Estado excluyente, que no reconoce los derechos de los pueblos indígenas, ni permite resolver el grave problema de la propiedad en el campo. La Constitución que queremos debe democratizar al máximo la sociedad guatemalteca.

Reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos

Pero la posible convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) no puede hacerse por medio de la actual Ley Electoral, pues ésta es antidemocrática. Actualmente se discuten cambios cosméticos a la Ley Electoral, que van en el sentido de restringir aún más la participación del pueblo trabajador, incrementando el número obligatorio de afiliados a los partidos y prohibiendo la participación en elecciones de partidos que no tengan candidato presidencial, entre otras cosas.

Esta Ley Electoral antidemocrática debe ser derogada, el Congreso debe aprobar una nueva, para permitir la más amplia participación popular en el caso que con la movilización popular obliguemos a convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Por ejemplo, así como se contempla la formación de Comités Cívicos Electorales que postulen candidatos a las alcaldías, se debe permitir la formación de Comités Cívicos que propongan también candidatos para delegados a la Asamblea Nacional Constituyente, que no estén vinculados a los partidos políticos. Debemos acabar con el monopolio de los partidos políticos, que permite que solo estos puedan presentar candidatos. Igualmente se debe permitir la participación de delegados de las organizaciones campesinas, sindicales, estudiantiles y populares en esta Asamblea Nacional Constituyente. De forma similar se debe permitir la participación de candidaturas independientes, disminuyendo el número de firmas requeridas para su inscripción.

Por un frente de organizaciones populares y de izquierda que luche por una ANC democrática

Sin habérselo propuesto, el presidente Pérez Molina ha puesto

PSOCA

el dedo en la llaga. Está abriendo una puerta por la que el pueblo guatemalteco puede y debe colarse y presentar sus demandas más sentidas.

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) hace un llamado a las organizaciones indígenas, campesinas, sindicales, estudiantiles, de mujeres, de jóvenes y populares a conformar un frente que luche por la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que introduzca los cambios urgentes que necesita el pueblo guatemalteco. Que exija un proceso abierto, democrático y transparente de elección de delegados a tal constituyente. Que elabore un plan de reformas que democratizen al máximo el Estado guatemalteco. Y que llame a la movilización por todos los medios posibles por la defensa y aceptación de tal plan.

Por lo pronto el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) propone el siguiente Plan de reivindicaciones básicas que debe implementar la Asamblea Nacional Constituyente, que llamamos a convocar e instalar:

1. Combate a la hambruna y desnutrición crónica mediante la implementación de una reforma agraria integral.

2. Reconocimiento del Estado guatemalteco como multiétnico, multicultural y multilingüe.

3. Reconocimiento de los derechos ancestrales de las comunidades indígenas, su cultura y lenguas.

4. Nacionalización de los recursos energéticos, de producción minera y telecomunicaciones.

5. Fortalecimiento del sistema público de salud con carácter gratuito a niveles que satisfagan las necesidades de la población.

6. Fortalecimiento del sistema de educación pública y gratuita a todos los niveles, mejorando la excelencia académica.

7. Alza general de salarios, estableciendo salarios mínimos acordes con el monto de la canasta básica. Los salarios deben subir automáticamente al ritmo de la inflación. Obligar a los patronos a pagar todas las prestaciones sociales de ley.

8. Plan de construcción de viviendas populares de buena calidad a bajos precios.

9. Plan de creación de empleos en base a obras públicas.

10. Juicio y castigo a los culpables de masacres y genocidio durante el conflicto armado interno.

11. Eliminación de los aparatos represivos clandestinos culpables de asesinatos de dirigentes sociales y sindicales. Juicio y condena de los responsables.

12. Cese de la creciente militarización y proliferación de bases del ejército.

13. Nacionalización bajo control de los trabajadores de las empresas que incumplan con la ley laboral y la libertad de sindicalización.

14. Cualquier alto funcionario (presidente, diputados, magistrados, jueces, etc.) debe ser electo directamente por el pueblo, y su mandato

Declaraciones y Tesis sobre Guatemala

puede ser revocado en cualquier momento

Centroamérica, 10 de Junio del 2012

Secretariado Ejecutivo Centroamericano (SECA)
PARTIDO SOCIALISTA CENTROAMERICANO (PSOCA)

**ANTE EL ESCÁNDALO DE
CORRUPCIÓN EN LA SAT:
¡¡QUE RENUNCIE EL GOBIERNO DEL PARTIDO
PATRIOTA!!
¡POR LA CONVOCATORIA A UNA
ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, LIBRE Y
DEMOCRÁTICA!!**

El 16 de abril del año 2015 fue desarticulada la extensa red de defraudación aduanera conocida como La Línea. La gravedad de la existencia y desmantelamiento de esta red es que estaba liderada por altos funcionarios del gobierno del Partido Patriota (PP) y de la misma Superintendencia de Administración Tributaria (SAT); su máximo dirigente era nada menos que el secretario privado de la vicepresidencia, Juan Carlos Monzón, y miembros importantes eran el superintendente de la SAT Omar Franco y su antecesor Carlos Muñoz. Otro cómplice de relevancia era Francisco Javier Ortiz, conocido también como Teniente Jerez, quien en los años 1990s estuvo ligado a la red de contrabando aduanero liderada por el fallecido Alfredo Moreno. 22 sospechosos fueron capturados en total.

El hecho de que la desarticulación de la red fue producto de un año de investigaciones de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público, añade otro elemento polémico, pues el mandato de la primera estaba por vencer este año, y el presidente Pérez Molina había manifestado durante meses su renuencia a solicitar a la ONU una nueva prórroga, ello a pesar de que la investigación inició a pedido del propio gobierno.

El actual gobierno ha pasado por una constante crisis de recaudación fiscal prácticamente desde su primer año en 2012, caracterizada por el incumplimiento de las metas de recaudación acordadas entre la

PSOCA

SAT y el gobierno. La red liderada por Monzón por momentos detenía sus operaciones, para no evidenciar tanto la caída en los ingresos del Estado. La recaudación en las aduanas bajó en 2013 de Q 15.8 millardos a Q 15.3 millardos, y se desaceleró en 2014; lo mismo sucedió con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre las importaciones. Las brechas fiscales en estos años ascienden a unos Q 7 mil millones, que han sido suplidos mediante la emisión de bonos del tesoro y la contratación de préstamos, incrementando la deuda pública. La crisis financiera llevó al gobierno a contemplar la creación de nuevos impuestos a la telefonía, cemento y actividades mineras para financiar el presupuesto 2015, de los cuales el primero se encuentra suspendido provisionalmente por la Corte de Constitucionalidad.

La burguesía está implicada en la defraudación

El descubrimiento y desmantelamiento de la red La Línea aparentemente da la razón a las cámaras empresariales que aglutinan a la burguesía, que desde hace años sustentan su negativa a pagar más impuestos en la fuerte propagación del contrabando y corrupción, así como en la existencia de un extenso sector informal de la economía que no tributa; reiteradamente han dicho que esta es la causa del bajo nivel de la tributación, y que en ellos deben enfocarse las políticas gubernamentales. Pero esto oculta los efectos negativos que tienen sobre el presupuesto estatal las exenciones fiscales de que gozan sectores del empresariado y la bajísima carga tributaria que existe en el país, que beneficia a la burguesía.

Al enterarse de las capturas, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) y la Cámara de Comercio Americana en Guatemala (Amcham), manifestaron su aparente complacencia. Para que exista corrupción se necesitan dos, el funcionario gubernamental y el particular que se beneficia. Las investigaciones calculan en un millar los empresarios que entraron en negocios con La Línea para evadir el pago de impuestos. La hipocresía del CACIF no puede ocultar la complicidad del empresariado en esta estafa al erario público. Las investigaciones deben llevar también a poner al descubierto a los empresarios implicados en el caso y ponerlos a disposición de los tribunales.

El escándalo ha sumido al gobierno en una grave crisis

La presencia de altos funcionarios gubernamentales en La Línea ha puesto en graves aprietos al gobierno y al Partido Patriota, en un año electoral. Al momento de realizarse las capturas Juan Carlos Monzón se encontraba en Seúl, Corea acompañando a la vicepresidenta Roxana Baldetti en un viaje privado para recibir un doctorado honoris causa.

Declaraciones y Tesis sobre Guatemala

Una serie de declaraciones confusas y contradictorias, han dejado más dudas que aclaraciones en el asunto. Baldetti dio declaraciones hasta el domingo 19, siendo que todo demuestra que arribó al país el viernes 17; ella afirma que, al enterarse del caso, Monzón no se encontraba con ella y lo despidió de su cargo vía telefónica, procedimiento inusual y no apropiado. Ahora Monzón se encuentra prófugo, al parecer en Honduras.

La cercanía de Monzón a Baldetti, y el aval de Pérez Molina al nombramiento de Muñoz y Franco, cada uno en su momento, como superintendentes de la SAT, no puede más que levantar profundas sospechas de la implicación de los funcionarios en la red de corrupción. El rastreo de las redes de corrupción hasta los años 70s involucra a gran cantidad de exmilitares, miembros de los organismos de inteligencia, que están vinculados a Pérez Molina. La presencia de Ortiz en La Línea indica claramente la continuidad de las redes, que nunca fueron totalmente destruidas.

Como resultado, el Partido Patriota ha empezado a desmoronarse. Su precandidato presidencial, Alejandro Sinibaldi, representante del sector empresarial en el PP, confirmó el 19 de abril los rumores sobre su renuncia. En los días siguientes diputados y alcaldes, algunos de ellos importantes financistas, anunciaron también su salida del PP. Esto ha sido un golpe mortal para el partido de gobierno, que tendrá que elegir apresuradamente nuevos candidatos; pero en medio del escándalo y el desprestigio, sus probabilidades de reunir una cantidad significativa de votos en las próximas elecciones se han reducido enormemente.

Las organizaciones de la burguesía han rechazado sus vínculos con el gobierno, al renunciar la Cámara del Agro y la Cámara de Industria de Guatemala a su participación en la Comisión Nacional Para la Prevención y Combate a la Defraudación Aduanera y el Contrabando, en la cual los representantes gubernamentales eran precisamente Carlos Monzón y Roxana Baldetti. Con este gesto la burguesía abandona al gobierno a su propia suerte.

La CICIG sale fortalecida

Quien ha salido beneficiada con el escándalo de la SAT es la propia CICIG. El gobierno de los Estados Unidos había presionada en diferentes oportunidades para que el gobierno de Guatemala solicitara una nueva prórroga de la CICIG. El presidente Pérez Molina, había manifestado que no pediría la prórroga de su mandato, afirmando que el gobierno y el MP debían arreglárselas solos; la extrema derecha hizo una vociferante campaña en contra de la CICIG también. Todo evidenciaba el temor a que la CICIG revelara asuntos oscuros en las alturas el gobierno, embarrando al mandatario. Bajo la presión de Barack Obama el presidente Pérez Molina ordenó la formación de una comisión que

PSOCA

investigara el desenvolvimiento de la CICIG e hiciera recomendaciones sobre la necesidad o no de su permanencia en el país.

Pero la revelación de la red de defraudación aduanera dejó al desnudo la incapacidad del Estado para perseguir y combatir las estructuras de corrupción. A un solo coro, las embajadas de los países imperialistas, las ongs de derechos humanos, los organismos de la "sociedad civil", los académicos, etc. clamaron por la necesidad de la permanencia de la CICIG. Hasta el CACIF, que había estado dudoso, se sumó en conferencia de prensa, con la presencia de los presidentes de todas las cámaras empresariales, a la petición de la permanencia de la CICIG. Pérez Molina ya no pudo negarse, y después de que la comisión investigadora diera un dictamen favorable, anunció solemnemente en presencia del cuerpo diplomático y sus ministros, que solicitaría la prórroga, para beneplácito de todos.

La intelectualidad de clase media, las ongs y demás incautos olvidan que la CICIG es un organismo creado e impulsado por el imperialismo norteamericano y la Unión Europea para garantizar el buen funcionamiento de las instituciones del Estado burgués en Guatemala; para eliminar la corrupción y garantizar la estabilidad jurídica que permita que las inversiones nacionales y foráneas puedan rendir ganancias en un entorno de orden y eficiencia.

El jefe de la CICIG, el colombiano Iván Velásquez, no lo pudo expresar mejor: "La Cicig se compromete con el Estado y con la sociedad a realizar todos los esfuerzos en el apoyo a las aspiraciones guatemaltecas por la consolidación de sus instituciones; ofrecer análisis coyunturales a través de informes temáticos; formular propuestas de reformas normativas que permitan consolidar instituciones; continuar con la persecución penal que desarrollamos hombro a hombro con el Ministerio Público ... La justicia reivindicará a la sociedad en su misión de la construcción." (Siglo XXI 24/04/15).

Sin embargo, la corruptela sigue campeando ante las propias narices de la CICIG. Después de dos audiencias, la jueza a cargo del caso, Marta Sierra, benefició con arresto domiciliario y pago de multa a seis de los 22 implicados, entre ellos Francisco Javier Ortiz (el Teniente Jerez) y Salvador González. Después de hacer el perjuicio, la jueza tranquilamente busca separarse del caso solicitando el traslado del expediente a una judicatura de alto impacto. No cabe duda de que la corrupción también campea a nivel del organismo judicial.

La oposición burguesa quiere pescar en aguas revueltas. El actual escándalo político pretende ser canalizado por la vía electoral por otras fuerzas políticas igualmente derechistas, como es el partido Libertad Democrática Renovada (LIDER) o Sandra Torres de la UNE, o por los seguidores del expresidente Portillo. Si bien es cierto la CICIG ha propinado un golpe espectacular a un sistema excesivamente corrupto, llamamos a los trabajadores y al pueblo de Guatemala a confiar

únicamente en sus propias organizaciones

Movilizaciones y protestas

El sábado 25 de abril del año en curso en horas de la tarde se realizó una concentración en la Plaza Central de la capital guatemalteca, convocada por diferentes organizaciones, para pedir la renuncia del presidente Pérez Molina y la vicepresidente Baldetti. La convocatoria, lanzada anónimamente, anunciaba que no habría discursos ni partidos políticos, rechazando acciones como quema de llantas y otras acciones "...que puede interpretarse como desorden público..." La agenda sería reunirse a las 15:00, cantar el himno nacional a las 15:45 y a las 16:00 retirarse.

El primer contingente de personas era gente de clase media acomodada, en la línea de los camisas blancas que protestaron en el mismo lugar contra el gobierno de Álvaro Colom durante la crisis por la muerte del abogado Rosenberg, muy obedientes de los lineamientos, expresando el descontento de los sectores medios contra el gobierno corrupto. Pero este grupo se vio pronto rebasado por una enorme avalancha de estudiantes universitarios, miembros de los grupos de izquierda y algunos representantes de organizaciones campesinas. Este nuevo grupo diversificó las demandas, denunciando a la oligarquía, al corrupto sistema político, a las instituciones estatales en su conjunto y a todos los funcionarios del gobierno. La aglomeración de gente llegó a varios miles que hicieron retumbar la plaza, empezando a diluirse cerca de las 16:30. En varias ciudades del interior hubo protestas similares.

Crear una alternativa obrera y popular

Para el martes 28 de abril fue convocada una Asamblea Social y Popular, de parte de organizaciones campesinas, indígenas, de mujeres, jóvenes, sindicales, derechos humanos, religiosos, académicos y sociales, que emitió una declaración exigiendo la renuncia del presidente y la vicepresidenta, que se posponga la convocatoria a elecciones generales y que en su lugar se elija un "Consejo de Estado integrado por representantes de pueblos, sectores populares y sociales". Llama también a convocar y constituir una Asamblea Nacional Constituyente, y a "convocar y constituir Asambleas Ciudadanas Permanentes que contribuyan a la reconstitución de los Pueblos, asuman el control de las municipalidades y aglutinen a las diversas fuerzas, sectores y Pueblos que están en los territorios."

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llamamos a impulsar la postura de la creación de una Asamblea Social y Popular en el intento de establecer una alternativa de gobierno independiente, que refleje a los sectores oprimidos y explotados y que de llegar a cristalizar establecería los elementos de poder obrero y popular.

PSOCA

Que se castigue a todos los culpables

La investigación de la CICIG ha conducido hasta ahora a la captura de algunos miembros de la banda La Línea. Pero sabemos que también se encuentran implicados numerosos empresarios que se prestaron al juego de la corrupción; ellos deben ser también capturados y llevados a juicio. Todos los implicados deben devolver el dinero robado al fisco y sus bienes deben ser confiscados. Debemos exigir en las calles que renuncie ya el presidente Pérez Molina y la vicepresidenta Baldetti, junto a todos sus ministros. El gobierno debe ser asumido de manera provisional por las organizaciones agrupadas en Asamblea Social y Popular, las que representan al pueblo de Guatemala.

Los asuntos del fisco y la SAT deben ser puestos bajo la supervisión y control de las organizaciones campesinas, sindicales y populares. El podrido andamiaje de las instituciones estatales debe ser reformado de pies a cabeza por una Asamblea Nacional Constituyente que transforme el país en beneficio de los desposeídos; esto después de una reforma a la Ley Electoral que permita la elección de delegados verdaderamente representativos del pueblo a dicha Asamblea.

¡¡QUE RENUNCIE EL GOBIERNO DEL PARTIDO PATRIOTA!!

**¡¡CONTROL DE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, CAMPESINAS
E INDÍGENAS SOBRE LA SAT Y EL GASTO GUBERNAMENTAL!!**

**¡¡CONVOCATORIA INMEDIATA A UNA ASAMBLEA NACIONAL
CONSTITUYENTE!!**

Centroamérica, 29 de abril del 2015

Secretariado Ejecutivo Centroamericano (SECA)

PARTIDO SOCIALISTA CENTROAMERICANO

**¡EN LAS PROXIMAS ELECCIONES:
¡LA IZQUIERDA NO DEBE DEJARLE EL CAMPO
LIBRE AL RECAMBIO BURGUÉS!
¡POR CANDIDATURAS UNITARIAS DE
DIRIGENTES OBREROS, CAMPESINOS,
INDÍGENAS Y POPULARES!**

La denuncia hecha en el mes de abril por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP) contra la red de defraudación aduanera enquistada en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), dirigida por el secretario privado de la vicepresidencia, abrió un período de grave crisis del régimen político en Guatemala.

Las masas salen a las calles

Las denuncias de corrupción desataron el descontento de la población, que se empezó a movilizar masivamente exigiendo la captura de los culpables y la renuncia de los gobernantes; fueron estas movilizaciones las que condujeron a la renuncia de Baldetti. Han sido las capas medias urbanas, la pequeña burguesía de las ciudades, quienes han tenido el mayor protagonismo en estas movilizaciones, en una lucha por objetivos eminentemente democráticos. Las organizaciones indígenas, campesinas, sindicales, estudiantiles y populares todavía no han logrado imponer su sello independiente. A pesar del surgimiento de la Asamblea Social y Popular (ASP), como organismo coordinador de buena parte de las organizaciones populares, ésta no ha podido expresar las demandas más sentidas de los explotados y oprimidos, en un programa propio que plantee una salida democrática y popular a la crisis. Más bien ha ido a la cola de grupos reformistas de la pequeña burguesía, como la Plataforma Nacional para la Reforma del Estado, dirigidos por el rector de la Universidad San Carlos (USAC) y varios organismos de la sociedad civil

El cuestionamiento al proceso electoral

La crisis del régimen político se agravó por el hecho de que este es un año electoral. La revelación de numerosos casos de corrupción ha provocado el desprestigio generalizado de los partidos burgueses mayoritarios (no solo del gobernante Partido Patriota), que controlan gran parte de las alcaldías y diputaciones, lo que ha redundado en el justo cuestionamiento del proceso electoral en curso. Existe el clamor por cambios a la actual legislación electoral. Todas las fuerzas políticas coinciden en esta necesidad, pero el viejo régimen ha hecho resistencia de todo tipo al más mínimo cambio.

El Congreso de la República abrió la discusión de reformas a cuatro bloques de leyes, formado las comisiones respectivas. Una de estas leyes es la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP). La plataforma, dirigida por el rector de la USAC, elaboró una propuesta de reformas a la LEPP, proponiendo algunos cambios importantes, pero insuficientes para democratizar los procesos electorales.

Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) produjeron su propia propuesta de reformas, a la que incorporaron aspectos parciales de la propuesta de la Plataforma. La Comisión de Asuntos Electorales del Congreso de la República discutió la propuesta del TSE, haciéndole cambios que desvirtúan en mucho su intención original. Aun así, la propuesta no ha sido discutida por el pleno de los diputados, debido básicamente al boicot de parte de los parlamentarios del Libertad Democrática Renovada (LIDER) y del Partido Patriota (PP), que no se presentan a las plenarios.

¿Posponer las elecciones?

La demanda inicial de las movilizaciones era la posposición de las elecciones para dar tiempo a la aprobación de las reformas electorales. Sin embargo, el TSE ha dicho reiteradamente que no se pueden postergar, y la intención de los diputados es que, de aprobarse las reformas, se apliquen hasta el siguiente período electoral, en 2019. Ante esto, se ha popularizado la consigna "en estas condiciones no queremos elecciones", llamando al voto nulo o a la abstención, reflejando el justo rechazo al orden existente.

El electorado clientelista, base social de los partidos políticos burgueses, ha tenido la tradición de votar por "el menos peor", entre las opciones de derecha; pero ante la descalificación de los políticos y sus partidos por las denuncias de corrupción, la opción de votar nulo ha tomado fuerza, en especial en sectores urbanos un poco más despiertos políticamente, como el estudiantado universitario. No obstante, una parte de la clase media, cree que el actual proceso electoral, con todo y las limitaciones antidemocráticas, debe ser utilizado para cambiar a las camarillas de los partidos, es decir, tiene ilusiones en que las votaciones

pueden generar cambios.

Pero en el área rural, donde hay menos acceso a la información y donde vive la mayoría de la población, los campesinos e indígenas creen todavía en los procesos electorales, especialmente en la elección de alcaldes. El panorama es muy contradictorio. Las fuerzas de la reacción no descansan en preparar una salida de recambio a la actual crisis política, utilizando para ello el actual proceso electoral, bajo la actual LEEP

No dejar el campo libre a la reacción

Las próximas elecciones generales se realizarán el 6 de septiembre. Las fuerzas de izquierda y el movimiento popular no han logrado imponer siquiera la reforma a la LEPP. Este impasse está siendo aprovechado por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), y otros grupos de la burguesía, para organizar un recambio pacífico del gobierno. Por eso el Congreso de la Republica no aprobó el antejudio contra Pérez Molina.

Esta situación coloca a las fuerza de izquierda contra la pared, especialmente aquellos partidos, como WINAQ, Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), y Alternativa Nueva Nación (ANN), que gozan de registro electoral pero que están forzados a participar bajo la actual LEEP. Independientemente de los ánimos se sectores juveniles que consideran que debe promoverse la abstención o el voto nulo, los revolucionarios nunca debemos dejarle el campo libre a la derecha para que imponga sus planes de recambio, debemos librar la pelea en las condiciones más duras para llevar nuestro mensaje liberador a las amplias masas que aún creen en los traicioneros mecanismos de la democracia burguesa, sobre todo en esta coyuntura donde ha descendido el nivel de las movilizaciones populares.

Las encuestas preparan el recambio burgués

La última encuesta publicada por el diario Prensa Libre el 10 de agosto, indica un descenso en la intención de voto del partido LIDER de Manuel Baldizón, hasta ahora el contendiente más fuerte, del 30.1% en abril al 24.9% a inicios de agosto. Varios alcaldes, 7 diputados y su candidato a vicepresidente, están acusados de actos de corrupción, lo que explica el rechazo de la población, aunque éste se ha producido básicamente en el área urbana. Como resultado del desprestigio de los políticos, se ha dado el repunte de un candidato marginal en abril, pero con un 16.2% en agosto, el comediante Jimmy Morales, del Frente de Convergencia Nacional (FCN), formado por ex militares contrainsurgentes de línea dura agrupados en AVEMILGUA, entre los que sobre salen, Pablo Nuila Hub, Quiso Ayuso y los Lima padre e hijo. El hecho que Jimmy Morales no ha ostentado cargos públicos ni haber

PSOCA

tenido previa participación política, le ha valido a este popular cómico el creciente respaldo del voto urbano. En tercer lugar, figura de Sandra Torres, la ex primera dama durante el gobierno Álvaro Colom, a la cabeza de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), con el 14.7%, con un voto duro básicamente rural y femenino.

Después de las grandes movilizaciones que sacudieron Guatemala, los grupos de poder ven con temor la candidatura de Baldizón, por su perfil de empresario populista, ambicioso e incontrolable. Estos mismos grupos tienen poca confianza en Sandra Torres, pese a llevar de candidato a vice presidente a Mario Leal, un empresario dueño de ingenios en Guatemala y Nicaragua. Todo parece indicar que el candidato de estos grupos de poder es el comediante Jimmy Morales, considerado un "outsider". Existen otros candidatos como Zury Ríos, hija de Efraín Ríos Mont, postulada por el partido Visión con Valores (Viva) y financiada por mineras y la anticomunista Liga ProPatria. Roberto Gonzales por la alianza Creo-Partido Unionista del eterno caudillo criollo Álvaro Arzú, alcalde de la Ciudad de Guatemala y financiado por núcleos oligárquicos como el Holding Multiinversiones de los Bosch-Gutiérrez y el partido Movimiento Reformador que solo postula candidatos a diputados y alcaldes, muy cercano a Jorge Briz, actual presidente del CACIF y eterno presidente de la Cámara de Comercio

Todas estas opciones electorales representan a sectores de la burguesía, y por lo tanto nunca podrán representar los intereses de los trabajadores y las masas populares. Existe una gran contradicción en la situación actual de Guatemala, pues la presión de las masas en las calles obligó a la renuncia de Baldetti, y forzado algunos cambios mínimos en la lucha contra la corrupción, pero al mismo tiempo los trabajadores y las masas populares no tienen una seria opción electoral, que se convierta en una real alternativa de poder ante la crisis del régimen.

Todavía podemos presentar candidaturas unitarias de dirigentes populares

La participación en las elecciones, aún bajo las duras condiciones antidemocráticas, representa una oportunidad de denunciar no solo el corrupto sistema político, sino de propagandizar ampliamente la necesidad de instaurar un gobierno de los trabajadores. Sería un error abandonar en manos de los partidos de la burguesía el proceso electoral. Aunque no se den los cambios deseados en las condiciones del actual proceso, la participación de la izquierda unida sería una valiosa herramienta para denunciar el injusto y corrupto sistema capitalista. Los revolucionarios aprovechamos todos los resquicios que ofrece la democracia burguesa para fortalecer el programa revolucionario de los explotados y oprimidos. Mientras no existan las condiciones reales para lograr un derrocamiento revolucionario del actual gobierno, la izquierda

Declaraciones y Tesis sobre Guatemala

esta forzada a librar la batalla electoral bajo las reglas impuestas por la burguesía y el imperialismo norteamericano.

Por ello llamamos a los partidos de izquierda que cuentan con ficha electoral (CPO-Convergencia, URNG-WINAQ) a unirse y presentar candidaturas conjuntas de representantes y luchadores de las organizaciones campesinas, indígenas, sindicales y populares que han defendido durante años los derechos de los oprimidos y explotados, en especial de la Asamblea Social y Popular, como ya sucede en muchos casos. La campaña electoral debe utilizarse no solo para denunciar la corrupción del gobierno y exigir cambios en el sistema político, sino para demandar la solución de los ancestrales problemas que afectan a la población trabajadora, explotada y oprimida. El planteamiento central deber ser la demanda de una Asamblea Nacional Constituyente representativa que transforme el país en beneficio de los más excluidos.

Pero a la par, la Asamblea Social y Popular, y otras organizaciones beligerantes como la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CENOC) y el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), deben ponerse al frente de las movilizaciones en las calles. La lucha democrática actual, al contrario de lo que creen algunos dirigentes de la ASP, es el momento de la lucha de los oprimidos. Son las organizaciones campesinas, indígenas, sindicales y populares las únicas que pueden dar un giro dramático a las movilizaciones democráticas, convirtiéndolas en una lucha social, por donde irrumpa el descontento acumulado por años y nos lleve a verdaderas transformaciones estructurales. De lo contrario, los grupos de poder enquistados en el CACIF, el Ejército y la embajada norteamericana lograrán solucionar gradualmente la crisis política del régimen, controlando las movilizaciones de la clase media urbana, y cambiando solamente lo que les conviene, arrebatando a los grupos burgueses corruptos el control del Estado. Cambiando un poco para al final no cambiar nada.

Centroamérica, 17 de Agosto del 2015

Secretariado Ejecutivo Centroamericano (SECA)
Partido Socialista Centroamericano (PSOCA)

**¡¡PEREZ MOLINA NO QUIERE RENUNCIAR....
TENEMOS QUE SACARLO CON
UN PARO NACIONAL!!
¡ABAJO PÉREZ MOLINA Y SU
DECADENTE GOBIERNO!
¡POR UN GOBIERNO DE LAS ORGANIZACIONES
POPULARES!
¡POR UNA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE
PLURINACIONAL Y POPULAR!**

En un nuevo golpe espectacular, el viernes 21 de agosto, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP), denunciaron que, como resultado de las investigaciones del caso de defraudación aduanera en el que está implicada la estructura "La Línea", llegaron a la conclusión de que los máximos dirigentes de la misma eran la ex vicepresidenta Roxana Baldetti y el presidente Otto Pérez Molina.

En base a la investigación por los delitos de asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo, se solicitó una orden de captura ante el Juzgado de Mayor Riesgo B contra Baldetti. La ex vicepresidenta fue capturada en el hospital privado en el que se había internado días antes y trasladada a la cárcel militar del Cuartel de Matamoros.

En cuanto al presidente, el MP interpuso una solicitud de antejuicio en su contra ante el Organismo Judicial, para poder procesarlo por los mismos delitos de que se acusa a Baldetti. En medio de insistentes rumores de la inminente renuncia del presidente, Pérez Molina declaró en cadena nacional, la noche del 23 de agosto, que no renunciará, rechazó su vinculación con La Línea, pidió disculpas por la corrupción en su gobierno, acusó al empresariado de beneficiarse con la

PSOCA

defraudación aduanera, invocó el apoyo del área rural a su favor, llamó a los ciudadanos a votar y se puso a disposición de los procesos legales que correspondan para demostrar su inocencia.

El presidente se queda aislado

El poderoso sector de la burguesía representado por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), abandonó finalmente a su suerte al presidente, exigiendo en conferencia de prensa el viernes 21 por la noche su "renuncia inmediata".

Como corolario, cuatro ministros y cinco funcionarios del gobierno, que están vinculados a la oligarquía, presentaron su renuncia. Ellos son el ministro de economía Sergio de la Torre, la ministra de educación Cynthia del Águila, el ministro de salud Luis Enrique Monterroso, el de agricultura Sebastián Marcucci, el comisionado presidencial para la Competitividad e Inversión Juan Carlos Paiz y los funcionarios del área de economía y finanzas Claudia del Águila, Sigfrido Lee, María Luisa Flores, Adela Camacho de Torrebiarte y Marco Antonio Gutiérrez. La Iglesia Católica, el 23 de agosto, en la persona del Arzobispo Metropolitano, Óscar Vián, también pidió la renuncia del presidente.

De esta manera se cierran las tenazas alrededor del gobierno de Otto Pérez Molina y el Partido Patriota, acorralamiento iniciado con las primeras denuncias y capturas del 16 de abril, impulsadas por la CICIG y el MP. Al inicio de la crisis, los partidos mayoritarios en el Congreso, Libertad Democrática Renovada (LIDER) y el gobernante Partido Patriota (PP), se opusieron a la solicitud de antejuicio contra el Pérez Molina, solicitada por el diputado de WINAQ, Amílcar Pop. Desde entonces, muchos sectores sociales le han retirado gradualmente su apoyo al presidente Pérez Molina, atrincherándose éste en un sector de las Fuerzas Armadas y en la alianza de facto entre LIDER y el PP dentro del Congreso.

¿Un golpe de Estado de baja intensidad?

Como ya hemos explicado en otras declaraciones, el imperialismo estadounidense, ante la necesidad de impulsar el Plan Alianza Para la Prosperidad (PAP), que se propone frenar la creciente migración de trabajadores centroamericanos hacia el norte, y el narcotráfico que azota la región, ha decidido impulsar cambios en los regímenes políticos del Triángulo Norte. Estos cambios apuntan a mejorar el funcionamiento de la democracia burguesa, barriendo con la corruptela que ha caracterizado por décadas a los gobiernos y los partidos políticos.

En Guatemala, ante el temor del estallido de una revolución social, un sector de la burguesía y del ejército, especialmente de los órganos de inteligencia y seguridad, están utilizando a la CICIG y al MP, para

Declaraciones y Tesis sobre Guatemala

forzar al gobierno de Pérez Molina a realizar los cambios necesarios que impidan que el movimiento de masas imponga los cambios desde abajo. Pero el tiempo y la paciencia se agotaron rápidamente. En este forcejeo las contradicciones han llevado al gobierno de Pérez Molina al borde de su caída. Por el momento, Pérez Molina se resiste a abandonar el poder, pero en un contexto de mayor debilidad y aislamiento social.

El sector burgués que presiona a Pérez Molina aspira a que el actual vicepresidente Alejandro Maldonado, asuma las riendas del poder bajo un gobierno transitorio títere de la oligarquía y del imperialismo norteamericano, con el objetivo de acelerar las reformas democráticas para contener la movilización de masas

¡A Pérez Molina hay que tumbarlo!

Si algo está claro es que el presidente Pérez Molina no va a renunciar. Las presiones del CACIF y del imperialismo no han logrado imponer a Maldonado. Las marchas no han tenido la fuerza suficiente para sacar a Pérez Molina e imponer reformas democráticas. Entonces, es necesario elevar la presión popular. Corresponde a la izquierda, los trabajadores, sindicatos y organizaciones indígenas y campesinas, convocar a un gran paro nacional para exigir la salida de Pérez Molina y su gobierno.

La Izquierda, la ASP, los sindicatos y organizaciones obreras, campesinas indígenas y populares, debemos constituir una alternativa de gobierno de los trabajadores, ante el desmoronamiento del gobierno de Pérez Molina.

Si logramos imponer esta salida revolucionaria, cambiaría dramáticamente la situación en Guatemala. Si eso no ocurre en los próximos días, tendremos que afrontar en clara desventaja el desafío electoral montado por el actual régimen político, porque hasta el momento es poco probable la posposición de las elecciones.

El panorama de las elecciones antidemocráticas

A dos semanas de las elecciones generales, el panorama se torna muy complejo. Por la tenaz oposición de los podridos partidos mayoritarios en el Congreso, la tímida propuesta de reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEEP) impulsada por la Universidad de San Carlos (USAC) y el Tribunal Supremo Electoral (TSE), quedó varada. En el área urbana, las capas medias y sectores populares, en una justa actitud de rechazo a los partidos y políticos tradicionales corruptos, exigen la posposición o la suspensión de las elecciones, pues el sistema electoral ha sido diseñado para perpetuar el control de los partidos que dominan actualmente el Congreso.

Debido al antidemocrático sistema electoral vigente, lo ideal sería que las elecciones se suspendan o se pospongan, y que antes de su realización se aprueben cambios profundamente democráticos a la Ley

PSOCA

Electoral, que permitan eliminar la corrupción en el sistema de partidos políticos y faciliten las condiciones para la postulación de candidatos independientes, que reflejen a los trabajadores y comunidades campesinas e indígenas, en la perspectiva de instaurar una Asamblea Nacional Constituyente que transforme el país en beneficio de los oprimidos y explotados.

Pero una cosa es la situación ideal que todavía no existe y que todos deseamos, y otra es la candente realidad política, tal como se nos presenta. Estamos a escasos días de las elecciones, y las fuerzas de la reacción se resisten a modificar al calendario electoral. La izquierda y el movimiento indígena y popular estamos ante una gran disyuntiva. La lucha en el plano electoral nos ha sido impuesta por los partidos de la reacción.

Nuestro objetivo estratégico debe ser tumbar al gobierno de Pérez Molina e imponer desde abajo la Asamblea Nacional Constituyente, para ello tenemos que combinar los métodos de lucha. Debemos priorizar la movilización para convocar e imponer el gran paro nacional, con la consigna central de: ¡¡Abajo el corrupto gobierno de Pérez Mollina!! Pero al mismo tiempo, no podemos dejarle el campo libre a las fuerzas reaccionarias del actual régimen, que están organizando una salida de recambio con la realización de las elecciones el 6 de septiembre. El escaso tiempo que falta para las elecciones ya no permite la presentación de candidaturas conjuntas de la izquierda. A pesar de que este sectarismo debilita la constitución de una alternativa de gobierno, reiteramos nuestro llamado a no desperdiciar el sufragio, para convertirlo en un instrumento más de protesta, votando críticamente por las candidaturas de dirigentes y representantes campesinos, indígenas y populares presentadas por los partidos URNG-WINAQ y CPO-CONVERGENCIA. Entre más votos saquen los partidos de izquierda menos probabilidades que la reacción imponga el recambio de gobierno. Una masiva elección de diputados y alcaldes pertenecientes a estas fuerzas permitiría la formación de un poderoso bloque de izquierda que debe continuar la lucha después de las elecciones, contra el actual sistema capitalista, e impulse a nivel del Congreso y municipalidades la inmediata tarea de imponer la Asamblea Nacional Constituyente.

Que las organizaciones populares conduzcan la lucha en las calles

El frente electoral es solo uno de los tantos frentes de lucha. Más importante es la lucha en las calles. En este tema hemos sido insistentes en la imperiosa necesidad de que las organizaciones campesinas, indígenas, sindicales y populares, las organizaciones de mujeres y jóvenes, y demás sectores sociales oprimidos, se pongan a la cabeza de las movilizaciones contra la corrupción e impongan su sello

Declaraciones y Tesis sobre Guatemala

de clase, complementando las demandas democráticas con las sentidas reivindicaciones sociales de los oprimidos y explotados de Guatemala.

La experiencia histórica nos indica que las revoluciones democráticas siempre inician como conflictos entre fracciones de la burguesía, y las revoluciones socialistas y populares inician como revoluciones democráticas, que son aprovechadas por los oprimidos y explotados para colar sus demandas e imponer el poder de sus organizaciones y partidos. Por ellos hemos insistido en que la Asamblea Social y Popular (ASP), en alianza con otras organizaciones consecuentes como CNOC y CODECA, se coloquen audazmente como la vanguardia de las protestas.

La lucha por cambiar Guatemala apenas comienza

Apoyamos incondicionalmente las protestas anunciadas para la próxima semana a partir del martes por la ASP, el magisterio en resistencia y la USAC. Debemos demandar la renuncia o salida del presidente Otto Pérez Molina; la reforma de la Ley Electoral y de Partidos Políticos con propuestas más profundas y democratizantes que las del TSE; el establecimiento de un gobierno de las organizaciones campesinas, indígenas, sindicales y populares sin la participación de representantes de grupos o partidos de la burguesía; y la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente Plurinacional y popular que transforme Guatemala en beneficio de los desposeídos.

Centroamérica, 24 de Agosto del 2015

Secretariado Ejecutivo Centroamericano (SECA)
Partido Socialista Centroamericano (PSOCA)

¡¡¡CAYÓ PÉREZ MOLINA!!!.....
¿Y AHORA QUÉ SIGUE?
LA LUCHA SE TRASLADA AL PLANO ELECTORAL.
NO VOTE POR LOS PARTIDOS PATRONALES:
¡¡LLAMAMOS A VOTAR CRÍTICAMENTE POR LOS
CANDIDATOS DE LA IZQUIERDA!!

Finalmente, la soga se cerró alrededor del cuello de Otto Pérez Molina. Los acontecimientos se sucedieron con rapidez. El 1 de septiembre en horas de la tarde los 132 diputados reunidos en el Congreso en sesión plenaria decidieron retirar la inmunidad al hasta entonces presidente Pérez Molina. De inmediato el Ministerio Público (MP) solicitó una orden de arraigo en su contra, que fue concedida en horas de la noche. El 2 de septiembre el MP solicitó orden de captura, que fue emitida por el juez a cargo de caso de defraudación aduanera La Línea.

Ese día a las 7 de la noche Pérez Molina firmó su renuncia al cargo de presidente de la nación, misma que fue entregada al Congreso casi a media noche. El 3 de septiembre, mientras el ex presidente se presentaba ante el juez Miguel Ángel Gálvez y el MP para la audiencia de primera declaratoria en su contra, 116 diputados reunidos en el Congreso aceptaron su renuncia, para luego juramentar como nuevo presidente al hasta entonces vicepresidente Alejandro Maldonado Aguirre; al finalizar la tarde el juez dictó prisión provisional contra Pérez Molina, quien fue trasladado a la cárcel militar ubicada en el Cuartel Matamoros.

La lucha contra la corrupción en Guatemala comenzó como un tradicional conflicto inter burgués, entre la camarilla jefada por Pérez Molina-Baldetti y sectores tradicionales de la burguesía, apoyados por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) y el gobierno de Estados Unidos,

PSOCA

pero en el transcurso de este conflicto irrumpieron las masas populares, presionando desde abajo.

El hecho más notable de estas jornadas de lucha fue el paro nacional del 27 de Agosto. Ante el peligro del desbordamiento popular, sectores de la burguesía se vieron forzados a paralizar sus negocios, sumando formalmente al paro nacional, creando un falso ambiente de unidad nacional contra la corrupción gubernamental. Algunos sectores de la izquierda perdieron la brújula, como la dirección del Comité de Unidad Campesina (CUC), una de las principales organizaciones integrantes de la Asamblea Social y Popular (ASP), quienes aparecieron en bloque con empresarios del CACIF y la Iglesia Católica, confundiendo la necesaria unidad de acción en la lucha con llamamientos conjuntos, que comprometieron seriamente la independencia política de la ASP.

No cabe duda que la renuncia de Baldetti, la de Pérez Molina y la mayoría de sus ministros, es un gran logro de las masivas movilizaciones de la población, que incansablemente han salido a las calles para exigir no solo la renuncia del ex mandatario, sino la total depuración del corrupto sistema político.

Ha sido la presión de las masas populares en las calles, y también la cercanía del proceso electoral, lo que llevó a la bancada del Partido Patriota (PP) y la de su hasta ahora aliado partido Libertad Democrática Renovada (LIDER), a dar la espalda a Pérez Molina y votar por quitarle la inmunidad, so pena de desprestigiarse aún más ante el electorado.

En nuestra pasada Declaración del 24 de Agosto del 2015, alertamos que "(...) el sector burgués que presiona a Pérez Molina, aspira a que el actual vicepresidente Alejandro Maldonado asuma las riendas del poder bajo un gobierno transitorio títere de la oligarquía y del imperialismo norteamericano, con el objetivo de acelerar las reformas democráticas para contener la movilización de masas"

Este escenario ya se produjo. Después de la renuncia de Pérez Molina, el Congreso nombró a Alejandro Maldonado como nuevo presidente de Guatemala, a escasos días de la realización de elecciones generales el próximo 6 de Septiembre. Maldonado es un viejo zorro de la política guatemalteca, cuya formación la obtuvo en la juventud del Movimiento de Liberación Nacional (MLN), el ultraderechista partido continuador de los principios de la contrarrevolución de 1954, autodenominado el "partido de la violencia organizada". Este es el personaje "idóneo" para conducir la transición ordenada por el CACIF y el gobierno de Estados Unidos.

Sin el estorbo de Pérez Molina, la oligarquía y el imperialismo tratan de resolver la crisis ahora por la vía electoral, conformando un nuevo gobierno bajo su absoluto control, y desde un nuevo Congreso conformado por bancadas pequeñas, impulsar las reformas que configuren un nuevo régimen político a su medida.

Existe un ambiente de borrachera democrática producto de la caída

Declaraciones y Tesis sobre Guatemala

pacífica del gobierno de Pérez Molina, que está siendo utilizado por la burguesía, el CACIF y las fuerzas de la reacción para legitimar la transición a través del proceso electoral. Mientras muchos están eufóricos por el enjuiciamiento a Pérez Molina, se olvida que las elecciones también son un campo de lucha para la izquierda y los sectores populares. Aunque no se hayan aprobado las ansiadas reformas electorales, estamos obligados a enfrentar a todos los partidos patronales, creando y fortaleciendo una alternativa de izquierda.

Llamamos a los trabajadores, campesinos, indígenas, mujeres, y demás sectores oprimidos y explotados de Guatemala, a profundizar la lucha en las calles, para terminar de borrar a los políticos corruptos y a los empresarios oligarcas involucrados en la corrupción y la evasión de impuestos. La lucha por transformar el sistema político nunca podrá estar completa si no la unimos a la lucha por una auténtica reforma agraria, por la defensa de los territorios contra las empresas voraces que destruyen el medio ambiente y no consultan a las comunidades, por salarios y condiciones laborales dignas para los trabajadores, por un sistema de salud pública eficiente y gratuito, por un sistema educativo igualmente gratuito y de alta calidad.

Estas demandas no solo deben ser exigidas en las calles. Debemos aprovechar todo resquicio que ofrezca esta democracia imperfecta y colocar representantes obreros y populares en el Congreso y alcaldías, que impulsen y apoyen la lucha por estas sentidas demandas. Por ello, en las elecciones del 6 de septiembre, llamamos al voto crítico por los candidatos postulados por la izquierda en los partidos CPO-CONVERGENCIA y URNG-WINAQ. La lucha por la democratización de Guatemala debe continuar en las calles y el Congreso, hasta lograr imponer la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente plurinacional e incluyente que transforme Guatemala a favor de los oprimidos.

¡Rechazamos al nuevo gobierno del ultra derechista Maldonado Aguirre, fiel sirviente del imperialismo y la oligarquía!

¡Por un gobierno de las organizaciones campesinas, indígenas, sindicales, de mujeres y populares!

¡Asamblea Nacional Constituyente plurinacional y popular ya!

Centroamérica, 4 de septiembre del 2015

Secretariado Ejecutivo Centroamericano (SECA)
Partido Socialista Centroamericano (PSOCA)

**25 TESIS SOBRE LA
SITUACIÓN ACTUAL EN
GUATEMALA**

25 TESIS SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL EN GUATEMALA

I.-

Guatemala ha sido el baluarte de la contrarrevolución en Centroamérica, desde la época colonial hasta nuestros días. Ahí estuvo asentada la autoridad colonial, y después de las dos independencias de Centroamérica, en 1821 y 1824, rápidamente se reagruparon las fuerzas que ayudaron a destruir la Federación. En el siglo XIX y XX fue así, con cortos periodos revolucionarios que fueron aplastados, como la experiencia reformista del gobierno de Jacobo Árbenz (1944-1954).

Desde entonces, la oligarquía y la burguesía guatemalteca han aplastado a sangre y fuego, las continuas rebeliones indígenas y las guerrillas que surgieron, aniquilando de paso a lo mejor de la vanguardia obrera y estudiantil. Guatemala y Colombia, son los países de América Latina que han utilizado por décadas métodos de guerra civil contra las masas en lucha.

II.-

El hecho de que haya utilizado métodos contrarrevolucionarios no significa que sean torpes políticamente. Las dictaduras militares se han alternado con gobiernos electos por el voto popular, la represión se ha combinado con aperturas controladas desde las alturas del poder. Contradictoriamente, al mismo tiempo que era el baluarte de la contrarrevolución durante los años 80 del siglo XX, en Guatemala se originaron los primeros planes de "reacción democrática", con las propuestas de Esquipulas I y II impulsados por la Democracia Cristiana.

III.-

A pesar de que en Guatemala hubo guerrillas por más de 40 años, éstas no lograron tomar el poder como ocurrió en Nicaragua en 1979. Tanto la guerrilla salvadoreña como la guerrilla guatemalteca se vieron forzadas a iniciar negociaciones en condiciones desventajosas, con

PSOCA

resultados desiguales en cada país.

En el caso de Guatemala, la URNG entró chorreando sangre al proceso de negociación (1991-1996) que culminó con la firma de los acuerdos de paz el 29 de diciembre de 1996. Estos acuerdos trajeron formalmente la paz o el fin de la guerrilla, pero los cambios democráticos anhelados por las masas quedaron congelados o relegados. La represión disminuyó, pero no desapareció, el asesinato de dirigentes campesinos, sindicales y populares se mantiene hasta el momento, pero no a los niveles de genocidio de los años anteriores.

La contrarrevolución se encuentra enraizada en todas las instituciones del Estado, que de una u otra forma utilizó métodos de guerra civil contra las masas. Pero al desaparecer el conflicto armado con las guerrillas, la apertura democrática permitió observar el trasfondo económico de este fenómeno, que no es otra cosa que la utilización de los recursos del Estado para el enriquecimiento de algunos grupos de la burguesía, emergentes o no, ligados al ejército o no, que engordan desde el control de las instituciones del Estado. En Guatemala les llaman mafias, pero nosotros preferimos llamarles por su nombre verdadero: fracciones de la burguesía que utilizan métodos de acumulación originaria de capital para enriquecerse.

Es tan grave esta situación peculiar en Guatemala, que el imperialismo norteamericano, preocupado por las consecuencias, impulsó la creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) como un organismo internacional, especie de árbitro, con el objetivo de reorganizar o depurar el Estado de estos grupos o fracciones que se fortalecieron en los años de la represión. Para librar esta batalla, la CICIG ha utilizado las banderas de la defensa los derechos humanos, de terminar con la impunidad, etc., impulsando algunas medidas en función de detener este lacerante problema que socava las bases mismas de la legitimidad del Estado.

IV.-

El régimen político que se instauró en Guatemala, después de la apertura democrática de 1984-1985, se caracteriza por la ausencia del bipartidismo predominante en Centroamérica. Desde entonces, ni un solo partido político se ha logrado mantener dos periodos presidenciales continuos. Este fenómeno refleja por un lado el rechazo popular a gobiernos fuertes o dictatoriales, después de largos años de represión y dictaduras militares, y por el otro la capacidad de maniobra de la oligarquía, que termina convirtiéndose en la gran electora del gobierno, a través de oscuras negociaciones entre los grupos de poder, ya sea imponiéndolo directamente o torciendo el rumbo con presiones y zancadillas.

Declaraciones y Tesis sobre Guatemala

Pero desde 1996 hasta el 2015, este régimen político, a pesar de algunas importantes formalidades democráticas, ha entrado en una fase de crisis y agotamiento.

V.-

Los Acuerdos de Paz trajeron el fin del conflicto armado, pero la mayoría de la población campesina e indígena no ha solucionado los problemas de sus comunidades, y las masas urbanas están asoladas por la violencia, la actividad de los carteles del narcotráfico y los problemas económicos.

Al no realizar los cambios democráticos que exigía el fin del conflicto armado, Guatemala comenzó a rezagarse económicamente en relación a sus vecinos, como Costa Rica, que salió fortalecida de la crisis de los años 80, y el Estado bajo el control de estos grupos siniestros comenzó a refractar la crisis social. El Estado burgués de Guatemala, tal como funciona actualmente, no responde a las necesidades del imperialismo norteamericano, ni a otros sectores de la burguesía.

El problema de la violencia y de la actividad militar de los carteles del narcotráfico, debilitan el rol del Estado burgués, y crean un problema de subdesarrollo estructural para la burguesía guatemalteca, que continúa perdiendo peso en el mercado regional.

VI.-

Quizá el problema que más sintetiza esa incapacidad del Estado burgués para impulsar el desarrollo de la economía, es la enorme crisis fiscal que convierte a Guatemala en uno de los países en donde los empresarios menos pagan impuestos. No solo no pagan impuestos, sino que se roban los pocos impuestos que recolectan.

La denuncia que hizo la CICIG en torno a las redes de corrupción enquistadas en la SAT, y dirigidas desde la oficina de la ex vicepresidenta Baldetti, representó un enorme remezón de las estructuras del Estado, del statu quo creado después de los Acuerdos de Paz de 1996.

¿Cómo pudo reunir la CICIG semejante información tan confidencial? Es obvio que esta información solo podían facilitarla el imperialismo norteamericano o los órganos de seguridad del Estado de Guatemala, lo que implica que un sector del ejército está detrás de la denuncia de la CICIG.

¿Cómo pudo la CICIG espiar, detener y procesar a una parte de la elite gobernante? La única explicación que encontramos es que detrás de la CICIG hay un sector burgués que quiere quebrar el control de las mafias sobre el aparato del Estado, y evitar la consolidación de esta "lumpen burguesía", pero sin afectar los intereses de otras fracciones

VII.-

Y como era de esperarse, este rezago económico también se ha acumulado en la conciencia de las masas, hartas del inmovilismo de la clase política y de la corrupción imperantes. Las movilizaciones contra la corrupción en la SAT, que originaron la caída de la vicepresidenta Baldetti, de importantes funcionarios del gobierno, y tienen al mismo presidente en peligro de perder su inmunidad, no fueron un rayo en cielo sereno, sino que refleja la acumulación de las contradicciones sociales que vienen desde décadas atrás.

Estamos ante una lucha democrática contra la corrupción, encabezada por la clase media urbana, con alta participación de las organizaciones indígenas, estudiantiles y populares, pero estas organizaciones luchan diluidas en el mare mágnum democrático.

A pesar de ello, estas son las movilizaciones más importantes que se producen en Guatemala, desde las que provocaron la salida del dictador Ubico y su sucesor Ponce Vaides en 1944, y las movilizaciones estudiantiles de 1962. No obstante, debemos estar claros de que en esta lucha participan diferentes sectores sociales, en una especie de frente común contra la corrupción. En este frente común tenemos la mano tenebrosa del imperialismo norteamericano a través de la CICIG, tenemos también al CACIF que mira en estas mafias a los competidores, y a una buena parte de los medios de comunicación. Detrás de esta marea democrática está un sector burgués y el imperialismo norteamericano, quienes hasta el momento mantienen el control de la situación, a pesar de las enormes movilizaciones que hemos presenciado.

Por eso es que, aparte de la consigna central de "renuncia ya", no encontramos consignas centrales que articulen a este amplio movimiento social de naturaleza democrática, y que planteen una salida democrática y popular a la crisis política.

VIII.-

Todas las revoluciones comienzan así, como conflictos entre sectores burgueses, y después las masas irrumpen y terminan destruyendo parcialmente o totalmente al Estado burgués y creando organismos de doble poder. Esa es la dinámica natural de las revoluciones.

En Guatemala no estamos todavía en una situación revolucionaria ("Los de arriba no pueden y los de abajo ya no quieren"), sino es una situación prerrevolucionaria caracterizada por crisis del régimen, conflicto inter burgués, ascenso de un sector de masas, pero sin

Declaraciones y Tesis sobre Guatemala

conducción revolucionaria. Las situaciones prerrevolucionarias pueden terminar en situaciones revolucionarias, o contrarrevolucionarias, o reaccionarias o en el más extraño de los casos en situaciones no revolucionarias. La crisis del capitalismo hace casi imposible vivir en situaciones no revolucionarias.

Es muy importante caracterizar la dinámica de la situación actual, de dónde venimos y adónde vamos. En política no valen los agoreros. Podemos cometer errores y por ello debemos estar haciendo ajustes permanentes de la realidad, porque ésta cambia por encima de nuestras voluntades o deseos. Pero solo quien no hace nada no se equivoca. Se trata de cometer los menos errores posibles para aprovechar la coyuntura. Trotsky solía decir, y Nahuel Moreno lo repetía constantemente, que la política es el arte de aprovechar las oportunidades.

IX.-

En Guatemala tenemos movilizaciones, que no son dirigidas o hegemonizadas por la clase trabajadora o los sectores populares, pero un sector de las masas ha salido a la calle. El gobierno no ha reprimido porque está desacreditado y lucha por desmovilizar, y porque un sector del ejército y la policía están con la CICIG. La táctica que han adoptado es que las masas se expresen en los marcos de la democracia burguesa.

La expresión organizativa más alta de la lucha popular es la Asamblea Social y Popular (ASP), muy permeada por la izquierda inserta en los ONGs y con bastante influencia del sector campesino e indígena.

Las posiciones de la ASP son muy progresivas. En una de sus primeras declaraciones ha planteado lo siguiente:

“Convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente multisectorial y plurinacional que implique procesos participativos de selección de representantes, redacte una nueva constitución, partiendo de los Acuerdos de Paz y establezca los fundamentos para el reconocimiento y respeto de los derechos de los Pueblos Originarios.

Para la realización de esta Asamblea Nacional Constituyente se deben posponer o suspender las elecciones dado que no hay condiciones para su realización.

Reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos y que, por lo menos incluya los siguientes cambios:

Garantizar la participación de los Pueblos y la participación equitativa de juventud, mujeres y de pueblos.

Candidaturas Independientes.

Que las diputaciones sean electas de manera directa y no por planilla.

Que se anule la posibilidad del transfuguismo.

PSOCA

Acceso en igualdad de condiciones a la propaganda en los medios de comunicación.

Financiamiento público en el proceso electoral y fiscalización de los recursos otorgados, por medio de una comisión de transparencia ciudadana.

No reelección de diputados y de alcaldes por más de dos períodos y, El voto para las y los guatemaltecos en el extranjero”.

No es una casualidad que la ASP se refiera a los Acuerdos de Paz, como el punto de partida. Como se puede apreciar, casi todo el contenido del programa de la ASP es de contenido democrático, consignas eminentemente políticas, sin levantar las reivindicaciones económicas de los diferentes sectores sociales. A pesar de ser enormemente progresiva, la ASP esta encasillada en los marcos de la democracia burguesa.

El programa de la ASP, tal como ha sido formulado, puede ser concedido por el imperialismo y la burguesía, porque no representa un peligro para el sistema capitalista. Las consignas democráticas se vuelven revolucionarias y transicionales en la medida en que prenden en la conciencia de las masas y éstas se movilizan. Solo la movilización y la propia experiencia elevan el nivel de conciencia de las masas.

Sin embargo, la ASP, en medio de sus vacilaciones e indecisiones, no se ha puesto al frente de las movilizaciones, perdiendo la oportunidad de dar un giro a las mismas impregnándolas con las demandas más sentidas de los campesinos, indígenas y trabajadores. Al contrario, hasta ahora se ha plegado a la dinámica propuesta por el Congreso de reformar algunas leyes; y en vez de proponer sus propias reformas, la dirigencia de la ASP se sumó a la propuesta de la Plataforma Para la Reforma del Estado, liderada por el rector de la USAC, que a la vez se sumó a la propuesta de reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos presentada por los magistrados del Tribunal Supremo Electoral al Congreso.

De esta manera, los líderes de la ASP han perdido un tiempo valioso, entrando al juego de los diputados del Congreso, mientras la clase media urbana se retira paulatinamente de las calles, dejando un espacio que deberían ocupar las organizaciones campesinas, indígenas, sindicales y populares.

X.-

La posposición o no de las elecciones es un asunto de enorme importancia. La mayor parte de los sectores involucrados en las movilizaciones demandan que se pospongan a noviembre y diciembre, para que antes tomen validez algunas de las propuestas de reformas

Declaraciones y Tesis sobre Guatemala

a la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Sin embargo, ni el Tribunal Supremo Electoral ni el Cacif están dispuestos a posponerlas. Ya sea que las elecciones se realicen en septiembre o en noviembre, consideramos que las fuerzas que representan a los campesinos, indígenas y trabajadores no podemos dejar descubierto el flanco electoral. Por ello llamamos a los partidos de izquierda que cuentan con ficha electoral (CPO-Convergencia, Urng-Winaq) a unirse y presentar candidaturas conjuntas de representantes y luchadores de las organizaciones campesinas, indígenas, sindicales y populares que han defendido durante años los derechos de los oprimidos y explotados. La campaña electoral debe utilizarse no solo para denunciar la corrupción del gobierno y exigir cambios en el sistema político, sino para demandar la solución de los ancestrales problemas que afectan a la población trabajadora, explotada y oprimida. El planteamiento central deber ser la demanda de una Asamblea Nacional Constituyente representativa que transforme el país en beneficio de los más excluidos.

XI.-

Pero a la par la Asamblea Social y Popular, y otras organizaciones beligerantes como Cenoc y Codeca, deben ponerse al frente de las movilizaciones en las calles. La lucha democrática actual, al contrario de lo que creen algunos dirigentes de la ASP, es el momento de la lucha de los oprimidos. Son las organizaciones campesinas, indígenas, sindicales y populares las únicas que pueden dar un giro dramático a las movilizaciones democráticas, convirtiéndolas en una lucha social, por donde irrumpa el descontento acumulado por años y nos lleve a verdaderas transformaciones estructurales. De lo contrario, los grupos de poder enquistados en el Cacif, el ejército y la embajada gringa lograrán solucionar gradualmente la crisis política del régimen, controlando las movilizaciones de la clase media urbana, y cambiando solamente lo que les conviene, arrebatando a los grupos burgueses corruptos el control del Estado.

XII.-

Las extraordinarias movilizaciones contra la corrupción acaecidas de abril a septiembre de 2015, debido a su limitado carácter democrático, que reclamaban básicamente un funcionamiento limpio de la institucionalidad del Estado burgués, pudieron ser encauzadas por la embajada gringa y la oligarquía hacia el proceso electoral. Esto dio como resultado que ganara la contienda el candidato novato e inexperto Jimmy Morales, autoproclamado como "ni corrupto ni ladrón",

PSOCA

respaldado por el partido FCN-Nación, fundado por exmilitares de línea dura. El voto a favor de Morales fue el voto de castigo contra los políticos corruptos y el sistema político en general.

XIII.-

La inexperiencia e improvisación de Morales y su partido se hicieron evidentes a lo largo de su campaña electoral, en la cual nunca presentaron un plan de gobierno coherente. Ya como equipo electo de gobierno, los representantes del FCN-Nación ante la comisión del Congreso que discutía el presupuesto gubernamental 2016, en vez de defender su propuesta de un presupuesto reducido, prefirieron retirarse de la misma, a pesar de la vital importancia del tema para la futura administración. En la elección de la Junta Directiva del Congreso de la República para 2016, los once diputados electos del nuevo oficialismo no lograron ningún puesto, y en ninguna de las comisiones legislativas lograron la presidencia. Para remediar esto, la bancada del FCN-Nación recurrió a la vieja táctica de reclutar a diputados de otras bancadas con la promesa de prebendas, en especial del control sobre la ejecución de obras en el interior del país, un lucrativo negocio; de esta manera logró sumar 37 diputados, la mayoría ex miembros del Partido Patriota y del partido Lider, acostumbrados a prácticas corruptas, convirtiéndose en la bancada más numerosa. Ocho de ellos ya tienen solicitud de antejuicio por actos ilegales.

XIV.-

En el acto de toma de posesión de las nuevas autoridades, el discurso demagógico y vacío del nuevo presidente Jimmy Morales contrastó con la exposición concisa del nuevo presidente del Congreso, Mario Taracena, quien expuso un plan concreto de trabajo para el legislativo, consistente en una serie de reformas a leyes vitales. Esto anticipaba los nuevos actores que, a medida que transcurrió el primer semestre del año, empezaron a protagonizar la vida política del país, opacando a un gobierno deslucido y falto de iniciativas.

XV.-

El presidente Morales presentó su equipo de gobierno hasta el día de la toma de posesión, después de postergar el anuncio una y otra vez. Esto fue sin duda síntoma de las negociaciones con los diferentes actores de poder en Guatemala. Al final el nuevo gobierno fue cooptado por la

Declaraciones y Tesis sobre Guatemala

embajada gringa, la oligarquía y los grupos burgueses emergentes, que lograron colocar a sus agentes en los puestos claves. Los grupos de la oligarquía y los grupos burgueses emergentes lograron influencia en los ministerios de Economía, Finanzas, Desarrollo Social, Energía y Minas, Agricultura Ganadería y Alimentación, la representación ante el Banco Centroamericano de Integración Económica, la oficina de Seguridad Alimentaria y Nutricional, el Programa Nacional de Competitividad, entre otras dependencias. Los intereses de Estados Unidos están presentes en los ministerios de Trabajo y Previsión Social, Defensa Nacional y Gobernación, y en la Dirección General de Inteligencia Civil. Otro grupo de funcionarios procede del anterior gobierno o son allegados al presidente Morales, entre ellos el ministro de Relaciones Exteriores, el de Comunicaciones, Educación, Salud y Asistencia Social, Cultura y Deportes, y las distintas secretarías vinculadas a la presidencia.

Morales se ha hecho rodear de cuatro exmilitares, una pequeña junta militar, sin cargos oficiales en el gabinete de gobierno, pero que tienen gran poder. Ellos son el diputado por el FCN Edgar Ovalle, los excoroneles Herbert Melgar Padilla y Mario Aragón Paredes, y el exgeneral Edgar Ricardo Bustamante. Los cuatro tienen un lado oscuro vinculado con organismos paralelos de seguridad y el narcotráfico. La permanencia de estos cuatro personajes al lado del presidente no augura nada bueno el gobierno del FCN-Nación.

XVI.-

La peculiar coyuntura por la que atraviesa Guatemala expresa una continuación de los factores que condujeron a la crisis política del año pasado, con la caída del gobierno del Partido Patriota. Estados Unidos continúa impulsando un nuevo plan de reacción democrática, realizando las reformas que considera necesarias para implementar el Plan Alianza Para la Prosperidad, que incluye expulsar de las instituciones del Estado a los funcionarios corruptos, enjuiciándolos, y también fortalecer financieramente las arcas estatales obligando a los empresarios al pago de impuestos. El motivo, como ya se ha explicado en otros espacios, es frenar el fuerte flujo migratorio de la población del Triángulo Norte de Centroamérica (Honduras, Guatemala y El Salvador) hacia los Estados Unidos, resultado de la miseria y la pobreza que han dejado las medidas neoliberales impulsadas por el mismo imperialismo. Pero también busca crear Estados fuertes, con instituciones que funcionen eficientemente, que sean sus aliados para contrarrestar la creciente influencia de los imperialismos emergentes, principalmente de Rusia y China, que ya tienen presencia en Nicaragua y Costa Rica.

XVII.-

El gobierno de Jimmy Morales ha dado muestras de debilidad e inseguridad al momento de enfrentar los graves problemas del país, dando la impresión de que improvisa infructuosas soluciones de corto plazo. Por ejemplo, en el alarmante tema de salud pública, empezó con el anuncio triunfal de que la solución sería recurrir a donaciones privadas de medicinas e insumos, que en efecto hicieron empresas grandes y ongs. Sin embargo, en julio el ministro Cabrera tuvo que renunciar ante las crecientes protestas de trabajadores de salud y su incapacidad para resolver la crisis permanente en los hospitales. A falta de un plan concreto, el gobierno convocó en mayo a un proceso de diálogo para discutir reformas al sector salud, cuyo resultado deja mucho que desear, pues no es claro sobre el financiamiento al sector y abre las puertas a la privatización parcial de algunos servicios. Algo similar ha ocurrido en el área de educación. Otra característica ha sido la disminución de la inversión pública, que según las autoridades del Banco de Guatemala ha caído hasta en un 20%. A finales del primer semestre del año, el gobierno ha ejecutado cerca del 40% del presupuesto 2016, la mayor parte en gastos de funcionamiento. Los motivos son varios: que los nuevos funcionarios están aprendiendo a administrar sus dependencias; que la nueva Ley de Contrataciones, en su afán de transparentar el gasto, impide tener agilidad en las compras; que la persecución contra la corrupción tiene atemorizados a los funcionarios, quienes prefieren ser cautelosos a la hora de autorizar y firmar gastos. Lo cierto es que la parálisis del gobierno ha sido un factor importante en la relentización general de la economía, manifiesta en lo que va del año.

XVIII.-

La escena política ha sido más bien protagonizada por los organismos que impulsan la batida contra la corrupción y las reformas al sistema político, y que gozan del respaldo de la embajada de los Estados Unidos: El Ministerio Público (MP), la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y la Presidencia del Congreso de la República. El MP y la CICIG iniciaron el año capturando a exmilitares implicados en masacres a la población en los años 80s, algunos de ellos vinculados al FCN, como el diputado Edgar Ovalle, mano derecha del presidente Morales durante la campaña electoral, y que no ha sido capturado porque goza del derecho de antejuicio, mismo que las cortes no han permitido que se levante; esta acción enviaba a Morales el

Declaraciones y Tesis sobre Guatemala

mensaje de que la embajada no toleraría a exmilitares con las manos sucias en los puestos de gobierno. En el transcurso de los meses, las denuncias y capturas solicitadas por el MP y la CICIG se han centrado en: los casos de corrupción en el otorgamiento de plazas de trabajo en el Congreso; el contrato fraudulento con una empresa española para la construcción de una terminal de contenedores en Puerto Quetzal; el financiamiento corrupto del Partido Patriota y el otorgamiento de contratos del Estado a cambio del mismo; la compra de regalos costosos para el expresidente Pérez Molina y la expresidenta Baldetti por parte de exfuncionarios del gobierno con fondos de sus dependencias. Por su parte la SAT, bajo el mando de un nuevo superintendente, ha intervenido varias empresas grandes y medianas, por fraude fiscal, capturando o arraigando a sus representantes legales o gerentes.

XIX.-

Lo particular esta vez ha sido la captura de grandes empresarios, vinculados a la oligarquía o la intervención de sus empresas; este ha sido el caso de los bancos G & T Continental y Banrural (el segundo y tercero en importancia del país), la empresa Aceros de Guatemala, la cadena hotelera Camino Real S.A., Ajemaya, Farmacias Galeno, Farmacias de la Comunidad, una exportadora de banano y una de café. En todos los casos la SAT ha logrado que cancelen centenas de millones en multas e impuestos atrasados. En el caso de los bancos arriba mencionados, sus gerentes y otros funcionarios resultaron implicados en el financiamiento corrupto al Partido Patriota. En mayo el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales demandó ante el MP a una serie de empresas azucareras y de palma africana vinculadas a la oligarquía por el desvío ilegal de ríos, en perjuicio de comunidades campesinas; sin embargo, en julio el ministro anunció que se iniciaría un diálogo con ellas en vez de recurrir a la vía legal. Esto quiere decir que el imperialismo estadounidense está dispuesto a enfrentar a quien sea, oligarquía incluida, en la implementación de sus planes, tal como lo afirmó el embajador Todd Robinson. Algo similar ocurrió en Honduras con la poderosa familia Rosenthal, implicada en casos de corrupción.

La alarma que ha cundido entre los exmilitares y sectores de la oligarquía tuvo su expresión en marzo, en las declaraciones del nuncio apostólico, respaldadas por el presidente Morales, pidiendo al cuerpo diplomático no intervenir en la política nacional; esto coincidió con una carta enviada por el canciller a los embajadores, pidiéndoles no intervenir en los asuntos internos del país, y amenazando con tomar otras medidas previstas en la normativa internacional aplicable. Esta maniobra parece dirigida contra el embajador de Estados Unidos y la representante del Sistema de Naciones Unidas. Después de marzo ya no

hubo otro intento de reaccionar contra los representantes extranjeros.

XX.-

En cuanto al Congreso de la República, el nuevo período legislativo inició con la denuncia, de parte del presidente de la Junta Directiva, Mario Taracena, de corrupción e ilegalidades en el otorgamiento de plazas e irregularidades en los salarios de los trabajadores; la denuncia atizó el fuego de los ataques de las instituciones del Estado contra los contratos colectivos de los trabajadores públicos. En el transcurso del semestre, el Congreso aprobó reformas a la Ley Orgánica del Congreso, la Ley Orgánica del Ministerio Público, a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, reformas al Código Penal y a la Ley en Materia de Antejucio, reformas a la Ley Orgánica de la SAT, a la Ley de Carrera Judicial, y aprobó la Ley Emergente para la Conservación del Empleo. Por su parte, la Cicig y los presidentes de los tres poderes del Estado iniciaron un diálogo nacional para impulsar importantes reformas al sector justicia. En todos estos casos, el juego de intereses en el seno del Congreso dio como resultado reformas que no satisfacen totalmente las expectativas de la población, en especial en los casos de las reformas electorales; sin duda algo similar sucederá con las reformas al sistema judicial.

XXI.-

Cabe preguntar si en esta sacudida a las estructuras corruptas enquistadas en el Estado y en la reforma al sistema político resulta beneficiado algún grupo específico de la burguesía, o dicho de otra manera, si Estados Unidos pretende favorecer a algún sector burgués en especial con los cambios que está impulsando. Hay que recordar que en Guatemala las familias que componen los principales grupos de la oligarquía operan sus negocios a través de grupos corporativos, que tienen inversiones en varios rubros de la economía a la vez; usualmente el capital acumulado originalmente en un sector (café, azúcar, industria, etc.), se ha invertido en el transcurso del tiempo en inversiones en otros sectores, preferentemente en el sector financiero, construcción, producción de energía, agroexportación, etc. En consecuencia, no tenemos en Guatemala una burguesía financiera que se diferencie claramente, por ejemplo, de la burguesía industrial, o de la que ha invertido en energía y minas, o agroexportación. Claro, estamos hablando de los grandes grupos oligárquicos, por supuesto que hay empresarios medianos cuyos negocios se limitan a un solo sector de la economía.

En las capturas, denuncias e intervenciones derivadas de los casos

Declaraciones y Tesis sobre Guatemala

de corrupción o defraudación fiscal, han resultado implicados por igual banqueros, industriales, comerciantes y exportadores; algunos vinculados a familias de la oligarquía, otros a grupos burgueses de reciente formación o emergentes, como se les suele llamar. La Cámara de Industria de Guatemala levantó voz de protesta ante la resolución de las cortes que ordenó el cierre de la empresa minera en La Puya. Pero la coordinadora de cámaras empresariales, Cacif, en términos generales ha aceptado que los empresarios que tengan asuntos pendientes con la ley deben enfrentar sus procesos y rendir cuentas, pidiendo solamente que se respeten los procedimientos legales. Solamente la cadena Albavisión, dueña de los cuatro canales de televisión abierta y de una cadena de radios, inició una campaña para desprestigiar a la Cicig y al MP, pues apareció involucrada en el caso de financiamiento ilícito al Partido Patriota; estos medios pertenecen a un poderoso empresario mexicano que reside en Miami, y tiene negocios similares en muchos países de América Latina, y su esposa tiene orden de captura internacional por el caso. En el otro extremo, solamente la Cámara del Agro manifestó explícitamente su respaldo a las acciones de la Cicig y el MP, pues, según manifestó, la corrupción afecta la construcción eficiente de caminos y carreteras, vitales para la movilización de los productos agrícolas.

XXII.-

Entonces, podemos afirmar que Estados Unidos está implementando sus planes de limpieza de las instituciones estatales y de reforma al sistema político, una nueva reacción democrática, por encima de los intereses particulares de cualquier grupo de la burguesía, y en contra de aquellos que resulten implicados, sea cual sea su grupo de interés económico. Los grupos oligárquicos y los grupos empresariales emergentes tendrán que adaptarse a los nuevos vientos que soplan, y llegar a acuerdos con la embajada gringa. Las reformas políticas en curso se verán limitadas por los nuevos acuerdos y los intereses ligados a ellos. Esto ya se está viendo en los cambios que el Congreso está aprobando a algunas leyes claves, cambios que se revelan insuficientes y que protegen determinadas ventajas para ciertos sectores. Una verdadera profundización del sistema democrático es imposible dentro del sistema capitalista, al cual es inherente la corrupción. La tarea de reclamar y construir una verdadera democracia recae sobre los hombros de las organizaciones de los oprimidos y explotados.

XIII.-

Los grupos que surgieron al calor de las movilizaciones democráticas del año pasado (JusticiaYa, La Batucada del Pueblo, Anonymus, Movimiento Semilla, etc.), a pesar de sus esfuerzos han sido incapaces de reavivar las protestas en la Plaza Central al nivel de convocatoria anterior. Ello a pesar de que formaron una coordinadora con otras organizaciones y empiezan a hablar de la posibilidad de formar un partido político. Estos grupos se han quedado sin banderas, y este año van como vagón de cola de la Cicig y el MP, apoyando sus acciones y reclamando la renuncia de funcionarios acusados de corrupción. En junio varios de estos grupos y otras organizaciones sociales, incluyendo a la Asamblea Social y Popular (ASP) y la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC), según los medios, dieron su respaldo a varios funcionarios del Estado, por la labor que realizan contra la corrupción, entre ellos: el presidente de la Corte Suprema de Justicia, la nueva Procuradora General de la Nación, el interventor de la Terminal de Contenedores Quetzal, el jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria, la jefa del Ministerio Público y el ministro de gobernación; es decir la plana mayor del Estado Burgués. El Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) manifestó su apoyo a la Cicig, y una coordinadora de asociaciones estudiantiles de la Universidad de San Carlos solicitó que la Cicig inicie una investigación en la administración de la Usac. En cuando a la izquierda electoral, URNG-Maíz ha dado su apoyo a la Cicig y el MP, mientras que Convergencia se encuentra dividida al respecto. Esto significa que el plan de reacción democrática del imperialismo va viento en popa, y que las instituciones del Estado burgués están ganando credibilidad ante la población.

XIV.-

A la par del crecimiento de la confianza en las instituciones estatales, que significa un retroceso en la consciencia, la presión de las bases de las organizaciones populares ha conducido a un nuevo ciclo de movilizaciones, luego de la calma que sucedió al proceso electoral 2015. A lo largo del año ha habido una serie de movilizaciones protagonizadas principalmente por los trabajadores estatales en las áreas de salud y educación; los sindicatos se movilaron mes tras mes demandando mayor financiamiento, abastecimiento a los hospitales, pago de salarios atrasados, unificación salarial, inversión en infraestructura escolar, insumos para los estudiantes, estabilidad laboral. En el caso del magisterio, tanto el sindicato mayoritario, el

Declaraciones y Tesis sobre Guatemala

Steg, como el Magisterio en Resistencia lograron que el Congreso retrocediera en la aprobación de un descuento a los salarios de los trabajadores estatales para subsidiar un incremento en la pensión que reciben los jubilados del Estado. Las continuas protestas también lograron que el presidente Morales accediera a que cuatro mil maestros en los reglones por contrato pasen a tener estabilidad laboral en el reglón presupuestado. El movimiento campesino también ha salido a las calles a plantear sus demandas. El bloque conformado por Cnoc, Codeca y Uvoc ha planteado la solución de una serie de conflictos por tierras, el cese de las exenciones de impuestos que benefician a maquilas y empresas exportadoras, la nacionalización de la producción y distribución de energía eléctrica, incremento de salarios, vivienda digna y otras demandas. Por su lado, el Comité de Unidad Campesina y la Asamblea Social y Popular organizaron la Marcha por el Agua, planteando el problema de la utilización de recursos acuíferos por parte de empresas agroindustriales en perjuicio de las comunidades indígenas y campesinas. Estudiantes de la Universidad de San Carlos en la Facultad de Humanidades y la Escuela de Bellas Artes realizaron importantes luchas contra los métodos antidemocráticos de elección de autoridades.

XV.-

Ante los planes del imperialismo de fortalecimiento de las instituciones del Estado burgués, los socialistas revolucionarios debemos plantear un plan de lucha unitario para las organizaciones campesinas, indígenas, sindicales y populares. Mientras la mayoría de las dirigencias de estas organizaciones están fomentando la confianza en los organismos del imperialismo y del Estado, continúan actuando por separado profundizando la división en el movimiento popular. Nuestro planteamiento debe partir de que la lucha contra la corrupción no sirve de nada si los servicios de salud y educación están en bancarrota, si la población no tiene vivienda digna, si los salarios no alcanzan para cubrir las necesidades básicas, si por falta de empleo los trabajadores se vuelcan a la economía informal, si hay hambre en el campo por falta de tierras, si las grandes empresas de agroexportación y energía continúan usurpando los recursos de las comunidades campesinas e indígenas; el problema no son los funcionarios corruptos, sino el sistema capitalista pues con la miseria que produce impide que hay una verdadera democracia. Este plan de lucha unitario debe enfatizar la independencia de clase, cero confianzas en los organismos del Estado, impulsar un movimiento clasista independiente y unitario, que demande una Asamblea Constituyente Plurinacional, de los Trabajadores y los Pueblos.

**Publicación del Partido
Socialista Centroamericano
(PSOCA)**



**EL
SOCIALISTA** 
Centroamericano

COMENTARIOS, SUGERENCIAS Y SUSCRIPCIONES:

El Socialista Centroamericano: elsoca@elsoca.org

Guatemala: psoca_guatemala@elsoca.org

El Salvador: psoca_salvador@elsoca.org

Honduras: psoca_honduras@elsoca.org

Nicaragua: psoca_nicaragua@elsoca.org

Costa Rica: psoca_costarica@elsoca.org

www.elsoca.org